



LA VERDADERA ESTRUCTURA CRIMINAL DE ALTO IMPACTO



Álvaro Uribe, G. Mario Montoya, Iván Duque, César Gaviria, Sarmiento Angulo, y los generales Zapateiro y Vargas

Una "estructura armada organizada de alto impacto criminal" investida con la autoridad del Estado y el látigo de la ley, ha victimizado impunemente durante décadas y siglos al pueblo colombiano, en una actitud tiránica que pisotea con desprecio la dignidad humana, la verdadera democracia, la paz y el sentimiento de soberanía patria.

Dicha estructura criminal avanza desde hace 200 años ondeando la absurda bandera santanderista de que "primero es la ley, así se lleve el diablo a la República", desconociendo que "el pueblo es la fuente de las leyes".

Congresistas, dirigentes políticos y leyes que no aportan a la dignificación de la vida humana, no sirven para nada, como diría el tribuno del pueblo Jorge Eliécer Gaitán. Sin demeritar el desempeño de los buenos y honrados legisladores, ¿de qué sirven esas montañas de leyes, de artículos e incisos que nada tienen que ver con los sueños de un mejor porvenir de los excluidos? Esas leyes, en su mayoría, fueron concebidas para acrecentar las ganancias de poderosos empresarios o para satisfacer el ego de congresistas intranscendentes.

Simón Bolívar, desde los primeros pasos de la República, increpó a ese tipo de falsos representantes del pueblo, diciéndoles: "veo vuestras leyes como Solóm, que sólo sirven para enredar a los débiles y de ninguna traba para los fuertes". Hoy en día, y luego de la denuncia de Gustavo Bolívar, en el sentido de que un elevado porcentaje de congresistas están contaminados por la corrupción, no hay ninguna razón poderosa para decirle a la gente que deje de asociar a sectores del Congreso con un nido de ratas que es

preciso depurar.

Tenemos que estructurar una nueva institucionalidad, unas ramas del poder público integradas con las mujeres y los hombres más capaces y honrados de Colombia. Es hora de ir pensando de nuevo en un proceso constituyente abierto en el que una Asamblea Nacional Constituyente verdaderamente democrática y popular ponga orden en el país y abra las puertas a la participación ciudadana real en el diseño de las estrategias que comprometen su futuro y bienestar en lo político, económico, social, la paz como derecho síntesis, las relaciones internacionales y la preservación del medio ambiente. Tenemos que hacer valer el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la tierra, al agua potable, a la energía eléctrica, a la conectividad... Las oligarquías creen que el ejercicio del gobierno es un derecho exclusivo de ellas, y que los de abajo solo tienen que callar y obedecer. Por eso se molestan cuando el nuevo gobierno ofrece una cena navideña a los indigentes o habitantes de la calle en el Palacio de Nariño, o invita a las organizaciones sociales a la Plaza de Armas de ese palacio a intercambiar sobre el nuevo proyecto de salud para los colombianos. La derecha y sus medios de comunicación en manada rabiosa quieren destrozar a Gustavo Petro y su visión de paz total e integral y su programa social de gobierno. Es tiempo de que millones de seres humanos vayan saliendo de las catacumbas de la exclusión.

Cuando el Libertador abolió la esclavitud, combatió la corrupción y aplicó medidas de justicia agraria, las oligarquías protestaron difundiendo que, "Bolívar quiere provocar una guerra interior en que ganen los que nada tienen, que siempre son muchos, y que perdamos los que tenemos, que somos pocos". Estaban molestos con esa potencia moral que tronaba: *"yo antepongo siempre la comunidad a los individuos"*.

Hoy, algunos prominentes políticos santistas y de la derecha, de esos que, ni rajan ni prestan el hacha, y que oficiaron como instrumentos de la perfidia frente al Acuerdo de La Habana, piensan que, haciendo una ley con "micos" subrepticios pueden proscribir a perpetuidad el derecho universal de los pueblos al alzamiento armado contra la opresión, o la lucha por una paz diáfana, sin traiciones...; y hay otros que, calificándonos sin ningún fundamento, como "estructura armada organizada de alto impacto criminal", creen tontamente que ese juego de palabras es suficiente para matarnos y aniquilarnos políticamente. Ese calificativo es clasista porque aplica sólo para los de abajo.

En la Mesa de La Habana, cada vez que se hablaba de la necesidad de generar un nuevo derecho que hiciera posible el acuerdo de paz venciendo el obstáculo de la justicia ordinaria y el derecho penal del enemigo, esparcían en el aire el maloliente tufo de su desacuerdo.

Y lo que hoy pretenden, lo hacen en venganza por nuestra denuncia irrefutable de la perfidia del Estado frente al Acuerdo de Paz y nuestro alzamiento en defensa de lo que verdaderamente se pactó. ¿Qué han cumplido? Muy poco o casi nada de lo sustantivo. Mucho bla, bla, blá. Ya van más de 1.200 líderes sociales y cerca de 360 excombatientes asesinados. Hoy quieren cobrarnos el no habernos dejado entrapar, asesinar, o conducir encadenados a los Estados Unidos, como ocurrió con Simón Trinidad, que ya completa 20 años en la prisión de máxima seguridad de Florence Colorado; una gran injusticia que clama al cielo perpetrada por ese monstruo de la criminalidad que es Álvaro Uribe Vélez. Y algunos dicen que de los presidentes no se puede hablar así. ¿Entonces, cómo registrar lo que ha pasado y está sucediendo?

Hablemos claro. Desde hace muchas décadas se instaló en la cúpula del Estado una "estructura armada organizada de alto impacto criminal", colocada allí por el poder económico para adueñarse exclusivamente del poder y aplastar la creciente

inconformidad social. La pretensión de sectores de la clase política de negarle a las FARC-EP Segunda Marquetalia, su carácter político, no es inocente. Su visión no es imparcial, pues no registra la larga existencia de un Estado genocida en Colombia al que también se le pueda ofrecer el "diálogo sólo para negociar su sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de su estructura".

La CIDH acaba de condenar al Estado colombiano por el exterminio a sangre y fuego de la Unión Patriótica, movimiento político surgido de un acuerdo de paz en el que las FARC fungieron como plataforma de lanzamiento de la nueva alternativa. El Estado con sus propias manos asesinó a 6.000 militantes y dirigentes de la UP, entre ellos a 2 candidatos presidenciales, senadores, representantes, diputados departamentales, concejales, alcaldes, y miles y miles de militantes del pueblo llano en la Colombia profunda y rural. También a militantes de A Luchar y del Frente Popular. Responsable: el Estado que actuó como estructura de alto impacto criminal combinando métodos propios de la barbarie nazi y sionista. Los cabecillas iniciales de esta matanza fueron altos funcionarios del gobierno, como el presidente Virgilio Barco, el general de tres soles y ministro de defensa Rafael Zamudio Molina que todavía anda por ahí muriéndose de viejo en la impunidad, y el agente del Mossad israelí Rafi Eitan, quienes coordinaban las oleadas semanales de asesinatos. Los paramilitares, el ejército, la policía y el DAS, como locos, oprimían el gatillo de la orgía de sangre. Todo, frente al silencio mudo y la inacción de la justicia.

No ha habido acuerdo de paz que el Estado colombiano no haya traicionado. En la década del 50 asesinaron a Guadalupe Salcedo, jefe de la guerrilla liberal del Llano que se había desmovilizado con sus hombres. En 1960 acribillaron en Gaitania a Jacobo Prías Alape, jefe negociador de la guerrilla de Manuel Marulanda Vélez en el diálogo con el gobierno del Frente Nacional. En la década de los 80 mataron a los principales comandantes del M-19, Carlos Pizarro, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, y a los hermanos Calvo del EPL. Ya denunciamos lo ocurrido con la Unión Patriótica, por lo cual el Estado colombiano, 30 años después, acaba de ser condenado por la CIDH. Y hoy





tenemos un ejemplo vivo y palpable de la perfidia del Estado frente al más elevado de todos los derechos, y es el incumplimiento de lo esencial del acuerdo de La Habana, primero por el gobierno de Juan Manuel Santos y luego por el gobierno de Iván Duque. Sobre el más reciente ejemplo de paz traicionada, sólo falta agregar que, mientras el máximo jefe de las FARC-EP en ese entonces, Alfonso Cano, adelantaba contactos exploratorios de paz con el gobierno, su campamento fue bombardeado por la Fuerza Aérea en el Cauca. El jefe insurgente fue capturado herido, y luego de varias horas de discusión entre Santos y el alto mando militar sobre qué hacer con el prisionero de guerra, que por esa condición ya era una persona protegida, consciente de lo que hacía, el presidente dio la orden de ejecutarlo. Cuatro años después Santos fue exaltado con el Premio Nobel de Paz, sin tener en cuenta lo que hizo con Alfonso, ni la gran perfidia, ni su engaño y traición en curso al Acuerdo de Paz de La Habana. Ese ha sido uno de los premios más inmerecidos de la Academia sueca, porque fue concedido a un embaucador de la paz. La consigna del santismo de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado" estaba escrita con la tinta de la perfidia. Su estrategia era negociar sin ceder, y en caso de tener que ceder, no cumplir.

La estructura criminal de alto impacto que operó desde la cúpula del Estado, introdujo a lo largo de la historia reciente el paramilitarismo que ha asesinado a más 100 mil ciudadanos, que ejecutó el despojo violento de tierras a campesinos pobres, para venderlas a precios irrisorios a los terratenientes de FEDEGAN y favorecer los negocios transnacionales.

Uno de los cabecillas más horrorosos de esa estructura criminal, el expresidente Álvaro Uribe, es el padre de los "falsos positivos", mediante los cuales se asesinó cobardemente y sin piedad a más de 6.402 jóvenes inocentes, los cuales fueron presentados a través de los medios como "guerrilleros muertos en combate" para mostrar con ríos de sangre el éxito de la maldita política de "seguridad democrática" de Uribe. El infame carnicero, a través de un decreto firmado por su ministro de defensa, Camilo Ospina, ofrecía a los militares jugosas recompensas, vacaciones y ascensos por "guerrilleros muertos". Hasta ahora sólo han llamado a algunos militares a responder ante la justicia. ¿Por qué no conducen encadenado ante los tribunales al autor detrás del autor, al determinador, al que dio la

orden desde la cumbre más elevada del Estado? Los militares no debieron dejarse utilizar más por las oligarquías violentas. La fuerza Pública siempre debe estar al lado del pueblo como garante de los derechos sociales, tal como lo mandató el propio Libertador.

Es muy triste constatar además que, los criminales de alto impacto que han operado desde el Palacio de Nariño, han matado más gente con sus políticas económicas, que con la barbarie de sus fuerzas represoras. Así ocurrió con la adopción de la política neoliberal por el expresidente Cesar Gaviria, quien pensando que con ello inauguraba una nueva era, en discurso a los colombianos pronunció, esa tonta expresión de "bienvenidos al futuro", que lo marcó para siempre en la triste y vergonzosa historia de una nación.

No solo se ha victimizado al país con las políticas económicas del Estado. Hablemos de la masacre de las bananeras, de la violencia de la década del 50, de los estados de sitio, del estatuto de seguridad del expresidente Turbay, de los más de 100 jóvenes asesinados por órdenes de Uribe Vélez y su títere Iván Duque por ejercer el legítimo derecho a la protesta en la revuelta social contra las injustas políticas del gobierno. Ninguno de esos dos expresidentes ha sido llamado a comparecer ante la justicia. Nadie investiga a los ejecutores de la matanza, de los heridos y desaparecidos: el general Zapateiro del ejército, el general Vargas de la policía y el ministro de defensa, Diego Molano. Pero el Fiscal de bolsillo de Uribe y Duque, en un acto de prestidigitación y cinismo, convirtió a los jóvenes de la *Primera Línea*, que son las víctimas, en los victimarios, y por eso los tiene en la cárcel.

Es estruendoso el silencio del Fiscal frente al asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse por el comando de fuerzas especiales contra las drogas y amenazas transnacionales creado por el expresidente Iván Duque, quien hoy goza de total impunidad. Duque y Uribe aparecen en fotos, muy sonrientes, con el jefe de la agencia gringa, CTU, Antonio Intriago, capturado en



KEVIN WITHAKER Embajador de EEUU. NÉSTOR H. MARTÍNEZ Exfiscal de Colombia

Estados Unidos por participar también en el brutal asesinato.

El Fiscal Barbosa, viajero frecuente a los Estados Unidos, no ha hecho su trabajo. Desde su regreso más reciente de Washington le está ladrando a todo el mundo, en especial a los que sueñan con una Colombia nueva. Gracias a él la fiscalía se ha transformado en un ente de defensa de la impunidad de los poderosos.

La lucha contra la corrupción y la impunidad está en cero. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantarnos a los ladrones del Estado que le han chupado la sangre y hasta el alma al pueblo? Contra ese cangro del capitalismo que está matando al país, nada ha hecho Barbosa. Es hora de que hable de sus investigaciones sobre el caso Odebrecht; que explique por qué encubre a su antecesor Néstor Humberto Martínez garante central de la impunidad que hoy cobija a políticos en campaña y a encopetados empresarios. Que informe cómo va la lucha contra las mafias de la contratación, la corrupción en la SAE, la triple A de Barranquilla, Dragacol, Chambacú, el saqueo de Monómeros por Duque y Guaidó, de los recursos del PAE que dejó sin comida a los niños en las escuelas, qué ha pasado con el lavado de activos que involucra a banqueros, por qué no se frenan los atracos del empresario Sarmiento Angulo, que ocurren todos los días, en los peajes de las carreteras de Colombia. A ese señor se le cae el puente de Chirajara y las pérdidas no las asume él como contratista, sino que tiene que pagarlas el pueblo... ¡Qué belleza!

También preocupa la impunidad de francotiradores abiertos y agazapados que disparan contra la paz, el más elevado de todos los derechos.

¿Quién no recuerda a los entrampadores de la paz, Kevin Withaker (embajador de EE.UU) y el exfiscal Martínez Neira?

Los colombianos debemos ocuparnos también de otros temas como el de cómo acabar con la estructura criminal de la importación, que sabotea la producción nacional. Que se acabe la importación de productos que el país produce o debe producir ¿Tenemos que hacernos el haraquiri para enriquecer a los importadores?

Otro asunto importante es el de nuestra soberanía. ¿Por qué regalar nuestra soberanía jurídica manteniendo la extradición de nacionales a los Estados Unidos? Las 7 bases militares gringas o

puntos donde hay presencia de soldados, mercenarios o contratistas, afecta nuestra soberanía. Esas tropas extranjeras terminarán metiéndose con más fuerza en nuestros asuntos internos como lo están haciendo en el Perú. Por otra parte, no hay manera de sentirnos soberanos, siendo peones indecorosos de la OTAN. Urge develar y suspender la farsa de la guerra de Washington contra las drogas cuando el poder real ha autorizado a la CIA y a la DEA financiar sus actividades desestabilizadoras en el mundo con dineros del narcotráfico. La sustitución de cultivos de uso ilícito y el fin de la aspersión aérea con tóxicos, ha quedado como un buen propósito escrito en un papel. Al fin tendrá que llegarse a la legalización de la cocaína bajo control y la regulación estatal, como ocurrió en el pasado con el alcohol y el tabaco.

Colombia tiene mucho que cambiar si quiere alcanzar la paz y ser potencia mundial de la vida. Tiene que ser más proactiva en la lucha por la hermandad y solidaridad entre los países de América Latina y el Caribe, en privilegiar las soluciones diplomáticas a la guerra, en movilizarnos contra los anacrónicos bloqueos económicos, financieros y comerciales impuestos por los Estados Unidos y contra las agresiones del sionismo y el nazismo en el mundo.

El rótulo que pretenden imponer para descalificar a las FARC-EP Segunda Marquetalia, resultó quedándole como anillo al dedo al Estado genocida que ha oprimido a Colombia. Basta ya esa discusión bizantina y artificial que han montado en torno al carácter de esta guerrilla de Manuel que seguirá siendo insurgencia política hasta la toma del poder si fuese necesario. No permitamos que ese grupo criminal de alto impacto, que se resiste a dejar el poder, termine destruyendo por esa causa, la esperanza de paz que hoy palpita con más fuerza en el corazón de las inmensas mayorías.

Dirección

FARC-EP

Segunda Marquetalia

Marzo 3 de 2023

